



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05001 31 05 013 2021 00114 01
Sentencia: S-304

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de Colpensiones, y al grado jurisdiccional de CONSULTA en lo no recurrido por esa entidad, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 25 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES demandó a COLPENSIONES pretendiendo el reconocimiento y pago de la sustitución pensional por el fallecimiento de su compañero permanente, Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ, a partir del 9 de mayo de 2020, al igual que los intereses moratorios o en subsidio la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que convivió con su compañero permanente - Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ - desde el año 1996 hasta finales del año 2011 de manera ininterrumpida, y desde comienzo del año 2012 comenzaron a vivir de manera ininterrumpida hasta la fecha del fallecimiento, el 9 de mayo de 2020. Dice que en el año 2012 se fueron a vivir al edificio Bariloche, luego vivieron con su hermana ROSALBA ROJAS YEPES en la carrera 43 # 77-80; en febrero de 2015 se fueron a vivir al Barrio Campo Valdés en la carrera 48ª #71-36, donde convivieron hasta el momento del fallecimiento.

Que el 11 de junio de 2020 solicitó a COLPENSIONES la sustitución pensional, entidad que por Resolución SUB 190769 del 7 de septiembre de 2020 negó la prestación con el argumento de que la investigación administrativa no logra dar fe de la convivencia durante los periodos antes descritos. Expresa que en la resolución que negó la sustitución se indica que según los vecinos los últimos 8 años los veían juntos, pero que no sabía si eran pareja o no, circunstancia que no puede ser una razón para la negación del derecho. El 21 de septiembre de 2020 solicitó la revocatoria de la resolución, pero fue confirmada la decisión por Resolución SUB 205852 del 25 de septiembre de 2020 y DPE 13591 del 6 de octubre de 2020.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la calidad de pensionado del Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ y el contenido de los actos administrativos que negaron la sustitución, advirtiendo que no le constan los demás hechos por tratarse de situaciones que deben ser probadas en el curso del proceso. Se opuso a las pretensiones por carecer de prueba respecto de la convivencia que se alega. Como excepciones propuso improcedencia de la obligación de reconocer y

pagar sustitución pensional, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, compensación, innominada o genérica.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 25 de mayo de 2022, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente, con ocasión del fallecimiento del señor JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ a partir del 9 de mayo de 2020, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, ordenando como retroactivo pensional causado hasta el mes de abril de 2022, la suma de \$25.234.053, junto con los intereses moratorios a partir del 13 de agosto de 2020 y las costas del proceso. Autorizó a Colpensiones el descuento destinado al sistema de seguridad social en salud.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación pues considera que no se cumple con el lleno a los requisitos exigidos por la Ley para considerar que la demandante es beneficiaria de la sustitución pensional solicitada, teniendo en cuenta la interpretación de la Corte Constitucional con la acreditación de esa convivencia y de los tres principios, de los cuales hay dos que la Sra. María Eugenia no logra llenar al 100%: no se afectó la estabilidad económica de la demandante con el fallecimiento del Sr Juan Arturo, pues tal y como se manifestó en la prueba testimonial y en el interrogatorio de parte, hay otras personas que le ayudan económicamente para su subsistencia y su situación no ha cambiado luego de la muerte del pensionado; y no hay prevalencia de que ese criterio material se haya podido determinar con relación a la convivencia, no hay claridad de que la convivencia que se alega haya

sido efectiva al momento de la muerte del compañero, elemento central para determinar que es beneficiaria del derecho. Agrega que de la prueba documental allegada al proceso se tiene a folio 16 del PDF 13 (expediente administrativo) donde se puede observar que la accionante solo aparece como beneficiaria del pensionado a partir del año 2018.

Difiere de lo manifestado por la Juez respecto de la investigación administrativa, que efectivamente no logró dar claridad para la entidad respecto de la relación entre María Eugenia y Juan Arturo; que la misma haya sido una relación que posiblemente existió y haya cumplido con el requisito de los 5 años anteriores de convivencia; respecto a la prueba testimonial, afirma que los testigos traídos al juicio tienen vínculos de parentesco con la parte actora y pueden tener algún interés en que ella se vea beneficiada con el reconcomiendo de la sustitución pensional.

Sobre los intereses moratorios, señala que en este caso se da la excepción a la imposición por cuanto no hubo certeza de la convivencia efectiva durante los últimos 5 años, el resultado de la investigación administrativa arrojó que no había criterio para determinar la convivencia para el reconocimiento de la prestación. Por último, manifiesta que en caso de que se determine que si hay lugar a ordenar el reconocimiento de los intereses moratorios, los mismos no se pueden concederse luego del término de 2 meses, según lo establecido en sentencia 588/2003 SU 065/2018, sino de 3 meses, contando el ingreso a nómina de pensionados.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido, el apoderado judicial de la parte demandante solicita sea confirmada en su totalidad la sentencia de primera instancia, toda vez que se logra demostrar en el proceso la convivencia de más de 8 años de la demandante con el causante

Sr. JUAN ARTURO, iniciaron una relación desde 1990 con una convivencia intermitente, a finales del año 1999 hasta el año 2004 existió separación debido a que el causante estaba privado de la libertad, en el año 2012 retomaron la convivencia, la pareja se fue a vivir donde la hermana de la accionante, luego compraron casa en el Barrio Campo Valdés donde permanecieron juntos hasta la muerte del pensionado; circunstancias que fueron confirmadas con la prueba testimonial y documental arribada al expediente.

Por su parte la apoderada de Colpensiones presentó alegatos de conclusión ratificándose en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, insistiendo en que la pensión de sobrevivientes está concebida para que el grupo familiar del pensionado para que cuando ocurra su muerte no se haga más difícil la situación familiar y no se afecten los recursos para su sostenimiento. La prestación económica se orienta a tres principios, estabilidad económica, reciprocidad y solidaridad, prevalencia del criterio material para analizar el requisito de la convivencia efectiva, circunstancias que no se prueban en este proceso; la investigación administrativa realizada por Colpensiones no logró establecer que la demandante estuviese haciendo vida marital con el causante hasta su muerte, además la prueba testimonial recaudada carece de imparcialidad, puesto que son familiares de la Sra. MARÍA EUGENIA y por ello pueden tener interés. Sobre los intereses moratorios, dice que Colpensiones no ha incumplido ninguna obligación toda vez que jurídicamente no estaba obligada a pagar la prestación solicitada sin el lleno de los requisitos legales, razón por la que se configuran circunstancias particulares y objetivas para negar la prestación en la instancia administrativa; cita las sentencias SL4754/19, SL5141/19 y SL232/18. También alega el momento a partir del cual se ordenó el pago de los intereses moratorios, pues su causación comienza a partir de la expiración del plazo de 3 meses que engloba 2 meses para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, más 1 mes para la inclusión en nómina de la solicitante.

CONSIDERACIONES:

En atención al objeto del recurso de apelación y al grado jurisdiccional de consulta en el que se conoce a favor de COLPENSIONES, corresponde analizar la decisión de primera instancia a través de la cual se accedió al reconocimiento de la sustitución pensional en beneficio de la demandante MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES, con ocasión del fallecimiento de quien dice era su compañero permanente, el señor JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ. El deceso se produjo el 9 de mayo de 2020, y la entidad en sede administrativa negó la prestación al considerar que no se logró acreditar el requisito de la convivencia ininterrumpida durante los últimos 5 años anteriores a la muerte, tal y como lo exige la ley.

En primer lugar, es importante dejar en claro que las siguientes circunstancias fácticas no son objeto de discusión a esta altura del proceso: **i)** el señor JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ falleció el 9 de mayo de 2020; **ii)** el causante estaba pensionado por vejez desde el 1º de octubre de 2010 según Resolución N° 002948 del 15 de febrero de 2011 expedida por COLPENSIONES; **iii)** la señora ROJAS YEPES solicitó la pensión de sobrevivientes el 11 de junio de 2020; y **iv)** tal prestación le fue negada a través de las resoluciones SUB 190769 del 07 de septiembre de 2020, SUB 205852 del 25 de septiembre de 2020 y DPE 13591 del 06 de octubre de ese mismo año, por estimar que no se hallaba acreditado el tiempo mínimo de convivencia con el pensionado fallecido.

Para el examen del derecho a la pensión de sobrevivientes que se reclama, en atención a la fecha del fallecimiento del causante, aplica al caso la Ley 797 de 2003, cuyo artículo 13 enuncia quiénes son los beneficiarios de tal prestación, exigiéndose en el literal a) que, en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por la muerte del pensionado, el cónyuge o compañero (a) permanente supérstite “... deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante

hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte".

Como sea que el señor JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ falleció el 9 de mayo de 2020, quien pretenda el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes aduciendo la calidad de compañera permanente, requiere, necesariamente, acreditar que convivió con él, como mínimo, desde el 9 de mayo de 2015.

Será esta la cuestión principal que debe dilucidar la Sala, en tanto resulta claro que el señor MONTOYA DÍAZ ha dejado causada la pensión de sobrevivientes en favor de aquella persona que acredite la calidad de beneficiaria de la prestación, pues el requisito de las semanas de cotización no se hace necesario atendiendo a su calidad de pensionado.

Y de la revisión que del material probatorio se ha realizado, estima la Sala que, luego del análisis crítico correspondiente, bien puede inferirse que la demandante no solo acredita que hacía vida marital con el causante en la época de la muerte, sino que se trató de una relación que perduró por espacio superior a 5 años, lo que permite, en consecuencia, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes que reclama.

Tal material probatorio, analizado en su conjunto, da pie para arribar a las siguientes dos conclusiones respecto del entorno en que se desarrolló la vida en común de la pareja: i) convivieron aproximadamente desde el año 2012 en el barrio Manrique de la Ciudad de Medellín, luego desde el año 2015 en el barrio Campo Valdés de esa misma ciudad, en la carrera 48ª 71-36; ii) la relación se mantuvo de forma continua e ininterrumpida hasta la fecha de la muerte del compañero, el 9 de mayo de 2020.

Esas conclusiones se obtienen de varios elementos de prueba que fueron allegados al expediente, como los siguientes:

1. Entre la documentación aportada al expediente, se incluye la Escritura Pública N° 2208 del 9 de diciembre de 2014 firmada conjuntamente por tales compañeros y la hija de la demandante de nombre YANETH PATRICIA VALENCIA ROJAS ante la Notaría Veintisiete del Círculo de Medellín, en la que se hace constar que el estado civil del causante para esa época era unión marital de hecho vigente con la Sra. MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES, "*...desde hace aproximadamente 24 años*", escritura donde el Sr. JUAN ARTURO confiere poder general a la demandante para administrar sus bienes. (pags.21/32 de 02Demanda).

2. Otro documento aportado y que resulta pertinente para los efectos pretendidos, es el Formato Estandarizado de Referencia de Pacientes del Ministerio De Salud Y Protección Social del 31/05/2019 en el que consta que la demandante es la responsable del paciente Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ y en el que se observa como dirección de residencia habitual del afectado la Cr. 48ª 71-36 Campo Valdés (pag. 81 de 02Demanda). Asimismo, se tiene el documento denominado HISTORIA CLÍNICA del Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ de la EPS PROMEDAN fechada del 11/02/2016 en la que se consigna como acompañante a la Sra. MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES; el Registro Individual de Prestaciones de Servicios en Hospitalización del Hospital General de Medellín del 08/06/2016 en el que se tiene como persona responsable del Sr. JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ a la Sra. MARÍA EUGENIA ROJAS, como acompañante a la hermana de la demandante Sra. MARÍA ROSALBA ROJAS y como dirección de residencia, la misma Cr. 48ª 71-36 (pag. 86/87 de 02Demanda).

3. La Resolución N° 125562 del 22 de junio de 2020 por medio de la cual COLPENSIONES reconoce a la demandante el pago del auxilio funerario en ocasión del fallecimiento del Sr. JUAN ARTURO por el

valor de \$4.389.015 (pag 534/535 del 13ExpedienteAdministrativoColpensiones).

4. Uno de los argumentos que tuvo en cuenta COLPENSIONES en las resoluciones por medio de las cuales negó el derecho pensional, fue el hecho de que la accionante en su solicitud dijo que convivía con el Sr. JUAN ARTURO desde el año 1996, no obstante, aquél estuvo privado de la libertad desde 1999 hasta el 2004.

Sin embargo, ese hecho de ninguna manera desvirtúa la convivencia que se pretende hacer valor en este proceso con el causante JUAN ARTURO, especialmente por el hecho de que –como se verá más adelante– la misma se configura ininterrumpidamente desde el año 2012 y hasta la muerte, que, se repite, acaeció el 9 de mayo de 2020, bastando para el tiempo requerido por la ley. Ahora, cabe asimismo recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU 108/2020 analizando el requisito de la convivencia en la pensión de sobrevivientes y la obligación de cohabitación, hizo un recuento de la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, frente a este tema dijo esa Corporación:

“Por otra parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que los requisitos de vida marital y cohabitación deben ser evaluados “en cada caso, y dependiendo de las circunstancias fácticas que se prueben”¹, dado que serán estas a las que “tendrá que acudirse, para determinarse si la separación material era o no justificada y si, a pesar de ello, el vínculo entre la pareja se mantuvo”². Por consiguiente, “la situación de que los esposos o compañeros no puedan estar permanentemente juntos bajo el mismo techo, por circunstancias especiales como podrían ser motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., no conlleva a (sic) que desaparezca la comunidad de vida o la vocación de convivencia de la pareja”³.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 24235, 25 de octubre de 2005.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 24235, 25 de octubre de 2005.

³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 30141, 10 de mayo de 2007.

5. Igualmente, argumenta la entidad al negar la prestación - e insiste en ello al recurrir la decisión - que el resultado obtenido en la investigación administrativa previa realizada, mostró la imposibilidad de confirmar la convivencia entre la pareja durante los últimos 5 años de vida del causante. Al respecto, se trata de una investigación realizada por la empresa CONSORCIO COSINTE Ltda. en la que se recaudó información de la demandante, así como del causante y su grupo familiar.

En tal sentido, lo primero que se debe advertir es que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias como la 32.166 del 10 de junio de 2008, ha indicado que la investigación pre judicial que realizan las entidades administradoras tiene cabida dentro del proceso no como un documento de carácter vinculante o determinante, sino como un medio probatorio más del conjunto aportado al plenario, que ha de examinarse de consuno con los restantes medios de convicción, sin que tampoco resulten vinculantes las declaraciones que sirven de base al informe de investigación, más aún cuando en aquellos casos no se ha tenido la oportunidad de interrogar y contra interrogar, ni se contó con la presencia de ambas partes y mucho menos del Juez que conoce la causa.

De todas maneras, lo que se desprende de esa investigación es distinto a lo que esa misma entidad interpretó como conclusión, pues el trabajo de campo realizado permitió conocer las versiones de varias personas del sector donde se desarrolló la vida de la pareja y todos ellos (Luz Marina Peláez, Leticia Mira, Amparo Mira, Arley Zapata Bolívar) dieron cuenta de la convivencia de la pareja por aproximadamente 8 años, que el causante vivía en el Centro de Medellín y luego vivió con ella en varias partes del sector (en casa de la hermana y luego en Campo Valdés). También fue consignado en la investigación administrativa que el Sr. Esteban Hernández, entrevistado -vecino- conoce a la pareja *"...de hace mucho tiempo (no recuerda tiempo) que siempre los veía juntos ahí en el balcón, el*

señor permanecía en una silla de ruedas, no sabe de qué falleció, pero recuerda que fue hace dos meses”.

En tales declaraciones, los vecinos dijeron que los vieron juntos en los **últimos** 8 años, a la Sra. MARÍA EUGENIA acompañando al causante, razón por la cual, la conclusión obtenida por Colpensiones se antoja contraevidente, al inferir que, *“...no se puede acreditar que el señor Juan Arturo Montoya Díaz y la señora María Eugenia Rojas Yepes convivieron juntos desde el año 1996 como manifiesta en el extra juicio ya que el causante estuvo preso desde 1999 hasta el 2004 y los últimos ocho años según los vecinos los veían juntos, la solicitante lo acompañaba, pero no saben si eran pareja hasta el día 9 de mayo de 2020, fecha en la que falleció el causante”.*

También se observa que se interrogó a las personas que habían presentado declaración extrajuicio en Notaría -para la investigación administrativa-, quienes ratificaron lo dicho en esa oportunidad.

Prueba testimonial.

Ya en lo que tiene que ver con las pruebas recaudadas en el curso del proceso, obviamente con la garantía del derecho de contradicción y la intervención de los apoderados de ambas partes, ha quedado acreditada y corroborada la convivencia entre la pareja por más de 5 años, anteriores al fallecimiento. Cabe resaltar, en atención al recurso de apelación presentado por Colpensiones, que si bien los testigos al proceso son familiares de la demandante, sus declaraciones fueron valoradas por la Sala como idóneas, concretas y coherentes entre ellas, así como con respecto de lo que la propia demandante había relatado previamente en su interrogatorio de parte y la información recolectada en el trabajo de campo o investigación realizada por Colpensiones, además de que las testigos percibieron directamente los hechos sobre los cuales declararon.

Respecto a este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo en sentencia como la radicada SL 2102 de 2020: *"El hecho de que el testigo se encuentre en circunstancias que afecte su credibilidad o imparcialidad, no quiere decir que deba desecharse automáticamente la prueba, sino que debe exigirse mayor severidad en el examen de la misma, y si de esa valoración se logra desvirtuar el indicio de parcialidad por tratarse de una declaración precisa, responsiva, exacta y cabal, el medio probatorio será plenamente eficaz"*.

Al efecto se presentaron a declarar MARÍA ROSALBA ROJAS YEPES, hermana de la demandante, JANETH PATRICIA VALENCIA ROJAS, hija de la demandante y DIANA MARÍA ACEVEDO ROJAS sobrina de la demandante. Coinciden en que JUAN ARTURO y MARÍA EUGENIA convivieron bastante más de 5 años, en principio -en los años 90- al parecer como una pareja de novios, pues ella iba y venía de la habitación del causante; y a partir del año 2012 tuvieron convivencia permanente, inicialmente en casa de su hermana MARÍA ROSALBA y después del año 2015 en casa propia en el Barrio Campo Valdés de la Ciudad de Medellín, Cr. 48ª 71-36, donde convivieron hasta la muerte del pensionado.

De manera concreta, MARÍA ROSALBA ROJAS YEPES relató que conoció a JUAN ARTURO desde el 93; dice que MARÍA EUGENIA iba a los apartamentos de él, se quedaba en la noche y volvía, *"...se quedaba 2, 3 días, luego se iba para la casa con los niños"*. Que él estuvo preso 3 o 4 años; agrega que en el año 2012, la pareja se fue a vivir a su casa en el Barrio Manrique *"mientras compraban la casa"*, lugar donde estuvieron hasta el año 2014. Que la casa que compraron queda en la 48 del Barrio Campo Valdés, entre la 71 y 72, hogar donde les hacía visita 1 o 2 veces en la semana, pues allá convivieron hasta la muerte de Juan Arturo, el 9 de mayo del 2020.

Como sea que la demandante tuvo tres hijos producto de una relación anterior, afirmó la testigo, sobre la relación con el padre de los hijos (JANETH, EDGAR, BRAYAN), que *“...él se fue hace muchos años, se fue y dejó a mi hermana”, “...antes del 93 la dejó”*.

Por su parte, su hija JANETH PATRICIA VALENCIA ROJAS en igual sentido, dijo que conoció al Sr. JUAN ARTURO desde que tenía 10 años de edad (al momento de la declaración tenía 42), que ellos (su madre y el causante) al inició de la relación estaban juntos, se separaban, peleaban y volvían; dice que la última vez en el año 2012 ya se fueron a vivir donde su tía en el Barrio Manrique (Cr. 43 77-80) después del año *“...2015 se fueron a vivir a la casa comprada, donde vivimos hoy...”* en el Barrio Campo Valdés. Ante la pregunta realizada por la Juez en punto a si JUAN ARTURO y MARÍA EUGENIA entre el 2012 y el 2020 se separaron, respondió que *“no”*, y que el causante, a la fecha de la muerte vivía *“con mi mamá, mi cuñada, primo y mi sobrina”*.

Señaló también que el Sr. JUAN ARTURO, estuvo en la cárcel en Texas Estados Unidos entre 4 y 5 años; dijo que estaba enfermo desde el año 2012, hospitalizado varios meses, usaba pañal, oxígeno-dependiente, que su mamá lo cuidó en la enfermedad y estuvo con él hasta su muerte. Detalla el día del fallecimiento y coincide con su madre y su tía en que fue llevado de urgencias a la Clínica León XIX después de la media noche y falleció en la madrugada.

Por otra parte, ante el cuestionamiento realizado sobre otras relaciones sentimentales que se le hayan conocido al Sr. JUAN ARTURO, dijo que supo que era divorciado y que tuvo una hija que no conocían. Por último, indicó que el Sr. JUAN ARTURO era biólogo, profesor, abogado; que se encargaba de las necesidades económicas de su madre, del pago de servicios, entre otros aspectos, pues ella estaba pendiente de él *“24/7”*.

La sobrina de la demandante, DIANA MARÍA ACEVEDO ROJAS, de 50 años, refirió conocer al Sr. JUAN ARTURO desde que tenía 12 años; indicó que desde el año 2012, JUAN ARTURO y MARÍA EUGENIA se fueron a vivir juntos a su casa en Manrique Central donde vivieron 3 años; luego se fueron al Barrio Campo Valdés porque su tía -MARÍA EUGENIA- compró casa. Dice que él -JUAN ARTURO- era inválido y ella lo acompañó hasta su muerte el 9 de mayo de 2020. Describe la casa del Barrio Campo Valdés donde dice convivieron los últimos años la demandante y el causante, de la misma manera que la Sra. MARÍA EUGENIA: segundo piso, sala, biblioteca, dos patios, seis piezas, dos baños y cocina. Segundo piso que se evidencia en la prueba documental (fotografías) allegada por Colpensiones en el expediente administrativo, en la investigación de campo.

En las anteriores condiciones, el conjunto probatorio allegado al proceso apunta a considerar que durante los 5 últimos años de vida del señor JUAN ARTURO, la pareja mantuvo una relación de convivencia bajo el mismo techo, continua e ininterrumpida, de la forma como lo exige la Ley 100 de 1993 en su artículo 47, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, requisito este que contrario a lo dicho por la recurrente es preponderante para el reconocimiento de la prestación. El argumento de la parte recurrente respecto al análisis del cambio en la estabilidad económica del solicitante con posterioridad al fallecimiento, no es un presupuesto normativo exigido para acceder a la sustitución pensional pretendida, pues el mismo está establecido jurisprudencialmente para el reconocimiento de dicha prestación en otros escenarios normativos diferentes a los que en este caso ocupan la atención de la Sala. Por lo que, la ayuda económica que pudiese recibir la Sra. MARÍA EUGENIA de su grupo familiar con posterioridad a la muerte del causante, en este caso concreto, no influye en el estudio de la pensión de sobrevivientes pretendida.

Consecuente con lo anterior, es posible concluir que la señora MARÍA EUGENIA ROJAS YEPES reúne los requisitos legales para ser

considerada beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor JUAN ARTURO MONTOYA DÍAZ, motivo por el cual la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Decisión que implica confirmar aspectos accesorios como el valor de la mesada pensional reconocida (1 SMLMV), la fecha de reconocimiento de la prestación (9 de mayo de 2020), el total de mesadas al año (14), y el valor del retroactivo pensional calculado hasta el mes de abril de 2022 (\$25.234.053), la facultad de Colpensiones de descontar, respecto al retroactivo objeto de condena, y el valor de los aportes al Sistema de Salud, pues esta consecuencia opera por el solo ministerio de la ley con arreglo al art. 143 de la Ley 100 de 1993, todo lo cual se encuentra ajustado a derecho.

Se advierte asimismo que en este caso no opera el fenómeno de la prescripción, puesto que el Sr. JUAN ARTURO falleció el 9 de mayo de 2020, la solicitud de sustitución pensional fue presentada por la actora el 12 de junio de 2020⁴, la última resolución proferida por Colpensiones frente al derecho pensional reclamado fue la DP 13591 del 06 de octubre de 2020 y la demanda fue presentada el 08 de marzo de 2021.

Intereses moratorios

Aspecto recurrido por la apoderada de COLPENSIONES. Cabe recordar que los intereses moratorios encuentran su regulación en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, según el cual, en las pensiones reconocidas a partir del 1º de enero de 1994, cuando la entidad incurra en mora en el pago de las mesadas pensionales, deberá reconocerle al pensionado un interés moratorio sobre la obligación

⁴ Se observa en el expediente digital su presentación el 11 de junio de 2020, sin embargo, la entidad de seguridad social en la Resolución Resolución SUB 190769 del 07 de septiembre de 2020 refiere que la solicitud de sustitución pensional fue recibida por esa entidad el 12 de junio de 2020.

incumplida a la tasa máxima vigente en el momento en que se efectúe el pago.

La norma en cuestión ha sido entendida por la Sala Laboral de la Corte Suprema en el sentido de que si la entidad se vale de argumentos jurídicos atendibles para adoptar determinada decisión – negando la prestación- y obra en virtud de los requisitos propios que exige la ley para tales efectos, no está obligada al reconocimiento de los intereses de mora, por lo que se hace necesario en cada caso verificar las razones por las cuales la entidad de seguridad social desconoce el reconocimiento de la prestación económica reclamada.

En este contexto, la entidad negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora ROJAS YEPES por lo que consideró falta de claridad y certeza respecto de la acreditación del requisito de convivencia con el causante durante al menos los 5 años anteriores al deceso, según se aprecia las resoluciones SUB 190769 del 07 de septiembre de 2020, SUB 205852 del 25 de septiembre de 2020 y DPE 13591 del 06 de octubre de ese mismo año, por las cuales se negaron la prestación a la demandante, en la primera de ellas se hizo constar, con motivo de duda para su reconocimiento, lo siguiente:

“De acuerdo a la información verificada, cotejo de la documentación, entrevistas y trabajo de campo, no se puede acreditar que el señor Juan Arturo Montoya Díaz y la señora María Eugenia Rojas Yepes convivieron juntos desde el año 1996 como manifiesta en el extra juicio ya que el causante estuvo preso desde 1999 hasta el 2004 y los últimos ocho años según los vecinos los veían juntos, la solicitante lo acompañaba, pero no saben si eran pareja hasta el día 9 de mayo de 2020, fecha en la que falleció el causante.

No se agrega foto del documento del joven (supuesto hijo) Juan Diego Valencia Rojas porque al final de la entrevista se puso agresivo con el investigador y se negó a mostrar el documento el cual alude no tiene y se negó a tomarse fotos con la solicitante y durante la entrevista fue bastante cortante.

Por otra parte, no se logra establecer comunicación con ningún familiar del causante que ratifiquen la convivencia”.

Observa la Sala que la entidad, en realidad, no tuvo razones de peso para desconocer la alegada convivencia desde el año 2012, o durante más de cinco años anteriores al deceso que es lo que interesa establecer (concretamente 8 años aproximados) de forma tal que pueda ser exonerada de los intereses en cuestión, teniendo en cuenta además que la circunstancia de que el causante hubiese estado privado de la libertad en el exterior entre los años 1999 y 2004, no incide en los 5 años de convivencia antes de la muerte.

De tal manera que, desde ese momento, el argumento de COLPENSIONES no es justificable, las visitas de campo a los vecinos informaron a la entidad de la convivencia de la demandante con el causante, se insiste por los menos durante *“los últimos ocho años”*.

En este orden, la Sala considera que los intereses moratorios deben ser reconocidos en este caso, tal y como lo dijo la Juez de Primera Instancia. Discute también la recurrente el a partir del cual deberán ser reconocidos dichos intereses, insistiendo que los mismos deben ser pagados tres meses después de presentada la solicitud -puesto que se debe contar un mes más con el que cuenta la entidad para el ingreso a nómina de pensionados-; no obstante, de conformidad con lo establecido en el art. 1. de la ley 717 de 2001: *“El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.”*.

Por lo tanto, presentada la solicitud el 12 de junio de 2020⁵, los intereses moratorios deberán ser reconocidos a partir del 13 de agosto de 2020, como fue dispuesto en primera instancia.

⁵ Según se extrae de la Resolución SUB 190769 del 07 de septiembre de 2020 expedida por Colpensiones.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín el día 25 de mayo de 2022, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones y a favor de la demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9be57f87f4a4308adb8e16231a48ea3d3d8669bdd2a2485f7114781c17819a0a**

Documento generado en 16/02/2023 02:23:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>